

POR UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA SOSTENIBLE



Desde hace años se plantea la necesidad de realizar políticas acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aborden, entre otros fines, el respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos de autor.

Sin embargo, la aparición de los servicios digitales ocultó dicha necesidad, impulsando **un auténtico expolio de nuestras obras** por la vía de los hechos consumados, dándole cobijo legal o utilizando nuestros derechos como moneda de cambio frente a otros intereses económicos, lo que ha intensificado el empobrecimiento del trabajo de escritores/as, traductores/as y el deterioro del patrimonio cognitivo y cultural común.

Dicho expolio o expropiación forzosa de nuestros derechos se está acelerando con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa (IAG). Los desarrolladores de IAG han realizado y realizan su trabajo bajo el principio de “todo vale”, lo que no es sostenible. Construir **un software utilizando nuestras obras como materia prima y, después, imponernos un modelo de negocio para disfrutar de esa nueva infraestructura, es injusto y abusivo.**

Ante la falta de respeto al trabajo de los **escritores/as y traductores/as solicitamos que:**

- Se protejan con una decidida, transparente y transversal acción pública los bienes **esenciales para la vertebración de la sociedad entre los que se encuentran nuestras obras y los valores sociales implícitos en las mismas.**
- Se establezca como único camino para el desarrollo del software de IAG **las obligaciones de solicitar autorización, remunerar y dar información suficiente y detallada a los creadores** de igual forma que se establecen principios irrenunciables en el desarrollo de otros productos que afectan a los ciudadanos. **Sin derechos claramente establecidos y respetados, estos desaparecen.**
- No se acepte la promoción de un nuevo contrato social que “blanquee” el uso no autorizado de nuestras obras en el desarrollo del software de IAG por la vía de los hechos. Para ello es indispensable que **las Administraciones Públicas no implementen ni utilicen software de IAG que no haya sido desarrollado con un respeto pleno, no solo a nuestros derechos como autores, sino a los derechos de privacidad de todos los ciudadanos y con respeto al medio ambiente.**